



El país aún no garantiza su sostenibilidad ambiental

La deforestación e insuficiencia en la protección de la naturaleza, dos lunares del plano ecológico.

Algunas cifras recopiladas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) parecieran no dejar tan mal ubicado al país en el tema ambiental. Por ejemplo, mirando el estado de nuestras selvas (que desde el punto de vista ecológico resultan trascendentales, por sus implicaciones para el clima global, los suelos y la hidrología), la nación se puso la meta para el 2015 de reforestar 23.000 hectáreas de terrenos promedio cada año. Desde el 2009, esa cifra ha sido fielmente cumplida, incluso llegando a más de 28.000 hectáreas rehabilitadas en el 2010.

Pero lo que se hace con buenas intenciones se borra de un tajo con la falta de vigilancia y autoridad en algunas regiones como el Caribe, la región andina y la Amazonia, donde el efecto contrario, la deforestación, es rampante. El promedio anual de tala en los últimos 20 años fue de 289.181 hectáreas, por lo que aquel buen intento de reforestar termina con un saldo negativo de 264.327 hectáreas promedio al año, según la ONU.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) es más optimista y ha establecido una tasa de destrucción de bosques de 120.000 hectáreas al año, que igual sobrepasa en casi cinco veces el esfuerzo por repoblar los campos y selvas con vegetación. Lo peor es que esa devastación se ha concentrado en la joya de nuestra biodiversidad: la Amazonia. En esta selva húmeda ecuatorial se acumula el 57 por ciento de la pérdida de cobertura vegetal, principalmente en Caquetá y Putumayo, aunque también en zonas vecinas como Meta y Guaviare.

Para Luz Marina Mantilla, directora del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi), este diagnóstico confirma los impactos que sobre la selva están teniendo la ganadería, la agricultura, los cultivos ilícitos y el comercio de madera. Se estima que el 40 por ciento de este último recurso que llega a las principales urbes colombianas se vende sin cumplir normas.

Pero no es solo la intensa deforestación lo que amenaza la biodiversidad, motor de ese deseado avance sustentable. También ha sido evidente que todos esos recursos biológicos no están lo suficientemente protegidos. Según el Convenio de Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, el 17 por ciento del mapa de los países que han ratificado ese acuerdo debe ser blindado con algún esquema de preservación, así como el 10 por ciento de sus áreas marinas y costeras. Colombia, aún con 59 parques nacionales, no cubre más del 13 por ciento de su territorio y no alcanza al 3 por ciento de



conservación entre sus áreas oceánicas (descontando la reserva de biosfera Seaflower, situada en San Andrés). El Sistema Nacional Ambiental trabaja con un presupuesto menor al 2 por ciento del producto interno bruto (PIB) y la Oficina de Parques Nacionales se mueve, por nombrar solo una entidad, con un déficit mayor a los 150.000 millones de pesos al año.

De esto no habla ni conoce Yamile Pince Pacheco, allá en Bahía Hondita, en la Alta Guajira. Todas las mañanas, o casi todas, ella debe caminar dos horas al menos, atravesar una porción del desierto, con tal de llegar a un pozo improvisado que la comunidad wayú ha adaptado debajo de un bosque de cactus, muy cerca de la vía que une a esta población con Punta Gallinas. Allí, decenas de mujeres sacan el agua para abastecer sus viviendas. La extraen con un balde atado a una cuerda con una polea centenaria que amenaza ruina. Luego cargan el líquido en galones y lo transportan al hombro, muy a pesar del peso. “Pero esto no es vida, ¿sabes lo que significa llevar esta carga a pleno sol? Mis niños tienen diarrea, debemos usar el agua medida, se cuida cada gota como si fueran perlas”, dice. Los más afortunados mueven el agua en burros. Igual, debe ser administrada con mano de hierro en las rancherías.

En síntesis: como si estuviéramos sometidos a la más larga maldición de la abundancia, y a pesar de nuestro potencial en naturaleza, quedó claro que nos rajamos en la forma como aprovechamos esa ventaja. Pero tampoco pasamos en saneamiento rural, con la cantidad de recursos hídricos que corren por nuestra geografía. Este último es otro de los ODM situados dentro del ‘objetivo 7’ (‘Garantizar la sostenibilidad del medioambiente’). Siguen existiendo miles de Yamiles, aunque el país se había puesto una meta de cubrir el 78 por ciento de las zonas rurales con acueductos y el 72 por ciento con alcantarillados. Según el PNUD, para el primer caso no pasamos del 54 por ciento y para el segundo llegamos a un poco más del 15 por ciento. El Ministerio de Vivienda, dotado de una mayor euforia, habla de que hay acueductos para el 72 por ciento de la población del campo. En ambos casos son números en rojo que afectan a 3,1 millones de personas aproximadamente, que hoy no saben lo que es tener acceso al agua potable en sus viviendas y mucho menos servicios sanitarios, la mayoría habitantes del Caribe. No solo de La Guajira. También en Atlántico, Bolívar, Magdalena y Córdoba. Con un agravante conexo: solo el 35 por ciento de las aguas residuales de los colombianos son tratadas. Las restantes van a dar a los ríos directamente y de ahí al mar. ¿Cuándo podría corregirse esta estadística? Los más ilusionados hablan de 10 años.

EL TIEMPO denunció esta problemática en marzo, y contó que, por ejemplo en Chocó, la cobertura total de acueducto registra los números más bajos, con apenas el 25 por ciento. Allí hay proyectos para paliar esta crisis en municipios como Lloró, Tadó, Unguía y Bahía Solano.



Faltan planes de contingencia

Este ODM referente al saneamiento no se cumple ni siquiera en las zonas urbanas, que deberían estar cubiertas, según se apostó, en un 99 por ciento con acueductos y en un 96 por ciento con alcantarillados. En este caso, nos acercamos al primer número, con el 98 por ciento en promedio, situación que es impulsada por capitales como Medellín y Bogotá, que han alcanzado cubrimientos del primer mundo. Pero nacionalmente hay una vulnerabilidad creciente relacionada con la calidad del agua y de las fuentes de donde se toma. Según la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria (Acodal), en los 32 departamentos no hay suficientes planes de contingencia contra la disminución de las lluvias, sequías que se harán evidentes de aquí al 2100 en el Caribe y la Orinoquia. Tampoco hay mapas de vulnerabilidad de los sistemas de acueducto frente a los cada vez más constantes fenómenos climáticos (granizadas, lluvias desatadas, fenómenos del Niño y la Niña). Según la Defensoría del Pueblo, el 80 por ciento de las cabeceras del país se abastecen de fuentes pequeñas o frágiles, como arroyos, quebradas y riachuelos, con inestables condiciones de regulación.

El Gobierno habla de un esquema de 'Crecimiento verde' para cumplir estos propósitos. Desde el Ministerio de Ambiente se dan los primeros pasos en una estrategia baja en carbono y se construye un ambicioso proyecto llamado Visión Amazonía, que busca disminuir la deforestación a cero en el 2020 y frenar el tráfico de fauna y flora.

Pero parece que necesitaremos otros 15 años para intentar que todo esto se cumpla y para que la realidad, más allá de la ficción y los buenos propósitos, comience a ser realmente responsable con nuestro entorno.

Diario El Tiempo, 17 de Mayo de 2015. Página 6.